

PRIMER PLANO

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (29)

El eurodiputado del PP y director de la Fundación Faes alerta de que, si el PSOE vuelve a formar Gobierno apoyado en los independentistas, se abriría «un procedimiento plebiscitario de efectos equivalentes a la autodeterminación»

«NO SOLO EL SANCHISMO SE ESTÁ AGOTANDO, SINO TODAS LAS FUERZAS POPULISTAS»

JAVIER ZARZALEJOS

RAÚL CONDE MADRID

Pregunta. ¿Se ha agotado eso que la derecha denomina sanchismo?

Respuesta. Lo que se empieza a agotar es la experiencia de la nueva política. Caminamos de manera acelerada hacia una reconfiguración del bipartidismo. El sanchismo es un producto más de esa nueva política, con contenidos populistas y extravagantes desde el punto de vista del marco constitucional. Estamos superando una etapa que no ha sido positiva, creativa ni productiva para el país.

P. Dice usted que el bipartidismo se está reconfigurando, pero todas las encuestas previas al 23-J señalan que hay dos extremos que aún conservan un notable peso electoral.

R. La tendencia es clara y no creo que vayamos a estar muy lejos de ese bipartidismo imperfecto en el que hay un partido en la primacía del centro-derecha y un apoyo a su derecha netamente conservador. En la izquierda las cosas son más complicadas porque tiende hacia una permanente metamorfosis de siglas. La clave es que, en su momento, el PSOE resistió la posibilidad de verse sobrepasado por Podemos, de la misma manera que el PP gestionó bien el riesgo de ser superado por Vox. Esas

fuerzas emergentes están condenadas al declive electoral.

P. ¿El 23 de julio está en juego, tal como sostiene Faes en su última nota editorial, la continuidad y la culminación de una política que llevaría al país a un escenario de «grave afectación constitucional»?

R. Sí, sin duda. Eso que llaman mayoría progresista no es más que un terreno de juego en el que, a cambio del poder, los nacionalistas han encontrado la posibilidad de sentar los fundamentos para una transformación radical que acabe con la Constitución. No me refiero a una reforma constitucional, sino a la disolución de la Constitución. Esa es la pregunta que nos tenemos que plantear en este momento: cuál sería el precio que los independentistas pedirían al PSOE en un eventual escenario de recomposición de esa supuesta mayoría que parte de considerar que fuerzas como ERC o Bildu son progresistas.

P. Hablamos de un referéndum de autodeterminación.

R. No van a ser tan groseros de plantear un referéndum de autodeterminación, que no tiene cabida, pero sí un proceso de desagregación constitucional que, en algún momento próximo, va a incorporar un referéndum

de efectos equivalentes. Una vez que se acepta que la soberanía se puede fragmentar, el resto será cuestión de tiempo y de ingeniería constitucional. Si esa mayoría en torno a Pedro Sánchez se pudiera constituir de nuevo, hay un proyecto que pasa por un cambio de hecho del sistema constitucional. Se ha generado un entorno institucional benévolo con esa orientación, por ejemplo, a través de la mayoría que ahora hay en el Tribunal Constitucional.

P. El pasado domingo, en una entrevista en *La Vanguardia*, Yolanda Díaz se comprometió a que Cataluña votará en 2024 «un nuevo acuerdo político».

R. A eso me refería. Ningún partido de ámbito nacional puede defender abiertamente la autodeterminación, pero sí un procedimiento plebiscitario de consecuencias políticas equivalentes. El referéndum de la OTAN fue consultivo,

pero nadie en su sano juicio creyó que si en 1986 hubiera ganado el *no*, el Gobierno habría seguido adelante con sus planes para la entrada de España en la Alianza Atlántica. En este caso, además, está el espejismo del referéndum con eso de por qué no votamos y resolvemos el tema de una vez. Sabemos que en Cataluña, de buena fe, puede haber mucha gente que considere que esto es una buena solución, aunque luego votara que *no* a una eventual independencia. Esto es una trampa. Primero, lo que se produce es la fragmentación de la soberanía. Y, segundo, toda la evidencia disponible indica que, lejos de resolver el problema, lo que hace es perpetuarse en favor de los secesionistas. Pasó en Canadá y está pasando en Escocia. Las sociedades salen más divididas de lo que entran y la naturaleza binaria de esa consulta es inmanejable.

P. El Gobierno habla de una Cataluña «pacificada». ¿Se ha comprado la paz social a cambio de erosionar el orden constitucional?

R. Ese es un mensaje especialmente perverso porque traslada la idea de que la aplicación del Estado de derecho es un obstáculo para la paz. En un sistema democrático, la ley es la condición de paz civil entre la ciudadanía. La normalización, en la medida que se haya producido en Cataluña, se debe a la aplicación del artículo 155 y a que los que cometieron un delito fueron acusados, encausados, juzgados y condenados. Y a que quien escapó sigue siendo perseguido por la Justicia por sus responsabilidades. Si el secesionismo se decide a otro proceso como el que vivimos en 2017 no es porque Sánchez haya derogado la sedición o abaratado la malversación, sino porque hay un principio fundamental en el Estado democrático: quien le echa un pulso a un Estado de derecho, lo pierde. Y tiene que perderlo. Este mensaje de que hemos

conseguido pacificar Cataluña, ¿a qué se refiere? ¿A los indultos? ¿A eliminar el delito de sedición? ¿Al desmantelamiento de la protección de la integridad constitucional española, como ha dicho el Tribunal Supremo?

P. Es decir, según esa idea, la Constitución, las sentencias de los tribunales y el procedimiento legislativo se convierten en un obstáculo para la convivencia pacífica.

R. Es trastocar el sentido de la democracia y del Estado de derecho. Se ha utilizado una reforma legislativa, en este caso, para eliminar

la sedición, para dejar sin efecto una sentencia firme, con nombres y apellidos, del Tribunal Supremo. Y, además, se ha hecho sobre la falsedad de

que hay que europeizar la sedición, lo que ha sido desmentido por la Comisión Europea. Los Estados son libres de tipificar la protección penal de sus sistemas constitucionales.

P. A la vista del caso de Carles Puigdemont, ¿habría que reformar el mecanismo de la euroorden?

R. Se dan circunstancias especiales porque se aplica a diputados del Parlamento Europeo. No sé si hay precedentes. A eso se une la inestimable colaboración de los tribunales flamencos, no diría belgas. En todo caso, hay que ampliar el número de delitos que dan lugar a una entrega automática y que la Comisión Europea pueda homogeneizar la interpretación que hacen los tribunales. La euroorden ha sido útil para España en la lucha contra el terrorismo, aunque hay una cierta crisis en el elemento de confianza. Pero seamos autocríticos. En España se ha remado en contra de la entrega de Puigdemont. El mismo día que íbamos a debatir en la comisión de asuntos jurídicos de la Eurocámara el levantamiento de su inmunidad, me desayunaba con unas declaraciones de Pablo Iglesias, entonces vicepresidente del Gobierno, diciendo que Puigdemont era un perseguido político.

P. Volviendo al contexto electoral. ¿Cuáles son las prioridades que debe abordar el nuevo Gobierno, del signo que sea?

R. Cuento con que se va a producir un cambio. La tarea de reconstrucción que se encontrará ese Gobierno va a ser muy intensa. La primera prioridad es recuperar y fortalecer el marco institucional del país. Es la base del resto de políticas. En segundo lugar, habrá que tener muy a la vista el proceso dentro del PSOE. Es una variable que no hay que despreciar. El tercer elemento será la economía. Hay que empezar a desescalar en el escenario de libre gasto y déficit.

P. El ex presidente José María Aznar ha acusado a Pedro Sánchez de haber dado un «poder desmesurado a minorías radicalizadas» por su alianza estratégica con populistas e independentistas. ¿El riesgo ahora, a tenor de los pactos del PP con Vox, es hacer recaer la gobernabilidad en la otra orilla?

R. El PP va a tener capacidad de liderar de una manera reconocible el proyecto político en los próximos cuatro años. Va a recoger un estado de ánimo de los ciudadanos que le compromete pero que, al mismo tiempo, le va a otorgar la confianza suficiente. Es muy importante tener un Gobierno de centroderecha y moderado con el que Europa no tiene que contener la respiración. Será una aportación relevante para la estabilidad.

P. Se lo formuló de otra manera. ¿El PP ha gestionado bien los límites en sus pactos con Vox desde el 28-M?

R. No conozco el detalle de las negociaciones. Lo que sí he visto es que hay situaciones distintas que tienen ver con la capacidad de entendimiento de las relaciones en el ámbito au-

DNI

► Nació en Bilbao en 1970. Fue secretario general de la Presidencia del Gobierno (1996-2004). Desde 2017 dirige la Fundación Faes, que preside José María Aznar.

► Coautor de 'Geografía del Populismo' (Tecnos, 2017) y autor de 'No hay ala oeste en la Moncloa' (Península, 2018).

PRIMER PLANO

LUCES PARA LA CONSTITUCIÓN (29)



SERGIO ENRÍQUEZ-NISTAL

tonómico entre el PP y Vox. Si uno ve el mapa autonómico, el PP está demostrando algo que se le había negado: la capacidad de tejer alianzas razonables. Los pactos con Vox no pueden tomarse como una plantilla fija, y basta ver que se han alcanzado otras fórmulas en Cantabria o Canarias. Vox también tiene que hacer una reflexión sobre lo que ha pasado en Murcia, donde hay una extraña coalición con el PSOE. Estoy muy tranquilo. La única formación que asume la Constitución desde el artículo 1 hasta la disposición final es el PP. Esa es su gran fuerza: ser un partido muy pegado a la cultura de la Transición.

P. Lo paradójico es que, a pesar de ello, la declaración unilateral de independencia, los dos referéndums ilegales y las leyes de separación se aprobaron durante el mandato del PP.

R. Eso no es paradójico, sino que demuestra que el secesionismo catalán, en su desvarío, llegó a la conclusión de que tenía que actuar unilateralmente. Por otra vía no iba a conseguir nada. Y no es esa la expectativa que ha creado el PSOE en esta legislatura desde aquella famosa declaración, con Consejo de Ministros incluido en Barcelona, en la que no aparece ninguna referencia a la Constitución. Ver al independentismo actuando por las bravas, cometiendo delitos y arrasando los derechos de los ciudadanos es coherente con la idea de que, con el PP, no hay posibilidad de alcanzar la secesión de otra manera.

P. Vox presentó hace una semana sus líneas maestras. Propone aranceles a Marruecos, derogar la Ley del Aborto y un referéndum sobre leyes

de género. ¿Cómo hay que definir a este partido?

R. Es una derecha conservadora populista. Dentro de su sociología electoral hay emanaciones de muchos orígenes. El populismo cambia o fracasa cuando está en el poder. Nunca es una opción de Gobierno; es la construcción de un discurso político que no sirve para sacar a los países adelante. El recorrido programático que tiene es muy limitado.

P. ¿Le sorprendió Alberto Núñez Feijóo en el debate de Atresmedia?

R. Estos meses le he conocido más. Feijóo actuó como Feijóo y Sánchez apareció como Sánchez. Ese contraste fue demoledor para este último.

P. El pasado 11 de julio, con motivo del 26º aniversario del secuestro y asesinato de Miguel Ángel Blanco, usted dijo que «frente al blanqueamiento y

SÁNCHEZ

«Los nacionalistas han encontrado la posibilidad para una transformación que acabe con la Constitución»

CATALUÑA

«El Gobierno ha trasladado la idea perversa de que aplicar el Estado de derecho es un obstáculo para la convivencia»

REFERÉNDUM

«Si se acepta que la soberanía se puede fragmentar, el resto es cuestión de ingeniería constitucional»

23-J

«El PSOE resistió a Podemos y el PP, a Vox. Esas fuerzas emergentes están condenadas al declive electoral»

FEIJÓO

«La prioridad del nuevo Gobierno sería recuperar y fortalecer el marco institucional. Es la base del resto de políticas»

PACTOS PP-VOX

«Estoy tranquilo. El PP es el único partido que asume la Constitución desde el artículo 1 hasta el final»

BILDU

«La negociación de Zapatero fue la condición para incluir a Bildu en la supuesta mayoría progresista»

la desmemoria, debemos reivindicar a todas las víctimas». ¿En qué se traduce este blanqueamiento?

R. El blanqueamiento se produce con la negociación política de José Luis Rodríguez Zapatero, que fue innecesaria y que retrasó el final operativo de ETA unos cuantos años. En esa negociación se producen dos cosas extraordinariamente graves. El Gobierno se presta, a través del Partido Socialista, a eludir la Ley de Partidos. De esto sabe bien Fernando Grande-Marlaska, entonces magistrado de la Audiencia Nacional. Batasuna estaba disuelta y su actividad era ilegal. El Partido Socialista se presta a que Batasuna pueda seguir actuando políticamente. Es conocida la reunión pública de Patxi López y otros con su cúpula, que produce la reacción de la madre de los Pagaza [Pilar Ruiz Albi-su]. El segundo defecto es el blanqueamiento de Arnaldo Otegi como hombre de paz y como la persona que, desde dentro, se opone a ETA. Hemos visto las consecuencias que ha tenido. Esos efectos políticos son terribles. Aquella negociación, vista en retrospectiva, es la condición para que luego se pudiera hacer de Bildu un componente más de la supuesta mayoría progresista. Cuando le preguntaron qué hacía el 10 y 11 de julio de 1997, cuando toda la sociedad española estaba en la calle pidiendo la libertad de Miguel Ángel Blanco, Otegi explicó que se encontraba en la playa. Ninguna sociedad con un mínimo de autoestima puede aceptar que estas personas se incorporen a la dirección del Estado, como dijo Pablo Iglesias. Podemos aceptar que alguien se arrepienta, pero no vamos a premiarlos políticamente. Aquel blanqueamiento político se ha convertido en un blanqueamiento social en esta legislatura, lo cual es intragable.

P. El pasado 3 de junio, en una entrevista publicada en *El Correo*, Otegi se preguntaba cínicamente: «¿Qué les va a solucionar a las víctimas de ETA que utilicemos la palabra condena?».

R. Es una retórica inmoral. La forma de intentar escapar a su sombra. El hecho de que haya concedido a Bildu la etiqueta de fuerza progresista es un estigma que va a pesar mucho tiempo sobre el PSOE. Ni Bildu es eso ni los que dirigen esta formación son demócratas. El responsable de Estrategia de Sortu, que forma parte de Bildu, es el último jefe de los comandos de ETA. ¡Si es que no se esconden! Otra cosa es que no queramos verlo o incluso que consideremos un éxito de la democracia tener actuando a los cómplices políticos de 853 asesinatos. Yo creo que el éxito de la democracia es detener a los terroristas, juzgarlos, condenarlos, disolver sus organizaciones y acabar con su financiación. Bildu ha dictado sus propias reglas y las impone a los demás. Ni colaboran con la Justicia ni condenan el crimen. Presentan en las listas electorales a quienes les da la gana y participan en los homenajes a los etarras. Esto no es progresista.